

C.A. de Santiago

Santiago, trece de octubre de dos mil veintiuno.

**Vistos:**

Por sentencia de siete de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT I-430-2019, caratulados “Distribuidora Puig Chile Ltda. con Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte”, se rechazó el reclamo de multa interpuesto por la reclamante, sin costas.

Contra ese fallo la parte reclamante dedujo recurso de nulidad, fundado en tres causales subsidiarias de los artículos 477 (en dos grupos de normas distintas) y 478 letra e) del Código del Trabajo, pidiendo respecto de todas las causales, que se acoja el recurso, anulando la sentencia, dictando fallo de reemplazo que declare que se acoge el reclamo de multa dejando sin efecto la resolución de multa N° 8599/19/50-1 de 23 de agosto de 2019 reclamada y consecuentemente la multa impuesta por 210 UTM.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los apoderados de ambas partes.

**Considerando:**

**Primero:** Que la reclamante invoca, como causal principal, la del artículo 477 del Código del Trabajo, en relación a los artículos 19 N°3 de la Constitución Política y artículo 420 del Código del Trabajo, en la hipótesis de infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Señala que el fallo rechazó en todas sus partes la acción de reclamación interpuesta, manteniendo la sanción aplicada de 210 U.T.M., desestimando su petición principal de declaración de ilegalidad de la multa, así como su petición subsidiaria de haber incurrido la reclamada en manifiesto error de hecho y derecho al imponer la multa, en ambos casos por haber excedido la reclamada el ámbito de su competencia, al haber estimado concurrente la existencia de una relación laboral controvertida, ámbito de competencia exclusivo de los tribunales laborales.

Indica que, en lo medular del considerando cuarto, el fallo razona que la multa cursada tiene naturaleza administrativa, no jurisdiccional, en cumplimiento de un imperativo legal, al constatar una transgresión de las normas laborales; resoluciones que son reclamables ante los tribunales de justicia, como aconteció, lo que permite la existencia de un pronunciamiento judicial que determine la correcta aplicación de la normativa legal, por lo que la fiscalizadora no obró fuera de su competencia, por lo que rechaza la petición principal. Asimismo, en cuanto a la petición subsidiaria, igualmente la rechazó, al establecer, en el considerando sexto, la existencia de una relación laboral respecto de la trabajadora que fue separada de funciones gozando de fuero maternal.



Argumenta la recurrente que el razonamiento que llevó a la decisión antedicha, respecto de su petición principal, infringió la normativa invocada en el encabezado, ya que la actuación de la Inspección del Trabajo fue más allá de la competencia que la ley le concede, obviando el fallo que se invadieron atribuciones exclusivas y propias de los tribunales de justicia, al determinar la reclamada la existencia de una relación laboral controvertida; en circunstancias que sus atribuciones se encuentran delimitadas a la constatación de hechos, no encontrándose amparadas por la presunción de legalidad de sus actos las conclusiones o inferencias que efectúan en relación a tales hechos, lo que resulta especialmente efectivo, ya que la presunta afectada, señora Renata Flores, llegó a un acuerdo judicial con su ex empleador, en causa T-1537-2019, ante el Primer Juzgado de Letras de Santiago, donde se señaló expresamente que la relación que unió a las partes fue en modalidad de Servicios Transitorios, siendo la empresa Usuaria la empresa Distribuidora Puig Chile Limitada.

**Segundo:** Que, la causal del artículo 477, sobre infracción de ley, tiene como finalidad velar por una correcta aplicación del derecho a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos tenidos por probados.

Que, por lo mismo, esta causal, en su segunda hipótesis, supone la aceptación de los hechos establecidos en la sentencia, por lo que la argumentación y sustento del recurso por este motivo debe ser coincidente con ese propósito.

Del mismo modo, no es factible en esta causal impugnar el raciocinio valorativo que ha efectuado la sentencia de los medios de prueba aportados en el juicio, desde que esta apreciación incide en la determinación de los hechos de la causa, lo que –como se dijo- es ajeno al objetivo de la infracción de ley.

Por último, es necesario tener presente también que las normas que se denuncian como infringidas deben tener influencia en lo dispositivo del fallo, esto es deben revestir el carácter de decisoria litis.

**Tercero:** Que si bien esta causal reitera los fundamentos de la reclamación, en cuanto a que la Inspección del Trabajo habría excedido sus facultades, al considerar que existía una relación laboral entre la trabajadora y la empresa reclamante, lo cierto es que de los hechos que motivaron la fiscalización no se advierte una vulneración de las normas que se estiman infringidas, sobre todo teniendo presente que el objeto de la actuación fiscalizadora radicaba en cerciorarse si se habría despedido a una trabajadora sujeta a fuero maternal, infracción grave que ameritaba una investigación, requiriendo los antecedentes respectivos.

Además de los argumentos vertidos por la sentenciadora en el considerando cuarto, que esta Corte comparte, cabe agregar que el



recurso no denunció como normas infringidas los artículos 503 inciso 1° y 505 del Código del Trabajo y artículos 1° y 23 del D.F.L N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que son relevantes para la solución de esta controversia, desde que dichas disposiciones son las que confieren facultades a la Dirección del Trabajo para fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, aplicando las sanciones administrativas, en caso de verificarse una infracción a dicha normativa, como ocurrió en la especie.

Por ende, al no haber invocado el recurso normas decisorias litis, las normas denunciadas como infringidas no influyen en lo dispositivo del fallo, por lo que esta causal debe ser rechazada.

**Cuarto:** Que, en subsidio, invoca la causal del artículo 477, en relación a los artículos 183-N, 183-Ñ, 183-O, 183- T, 183-U y 183 AE, todos del Código del Trabajo, en la hipótesis de infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Señala que el fallo incurre en infracción de las disposiciones citadas desde que al dictar sentencia confunde dos contratos que están presentes en el trabajo en empresas de servicios transitorios, el “contrato de puesta a disposición de trabajadores”, regulado en el artículo 183-N y siguientes del código del trabajo, con el “contrato de trabajo de servicios transitorios” regulado en el artículo 183-R y siguientes.

Argumenta que, respecto al primer tipo de contrato citado, todos aquellos acompañados al proceso cumplen íntegramente con las disposiciones y requisitos establecidos en los artículos 183-N y siguientes del código del trabajo, sin que ninguno haya superado los plazos establecidos en el artículo 183-O del mismo cuerpo legal, destacando que la norma habla de cada contrato individualmente, por lo que resulta improcedente calcular el plazo legal en base a una sumatoria de los plazos de varios contratos.

Señala que el fallo aplica erradamente la última disposición citada, ya que para calcular el plazo suma la duración de los contratos de trabajo de servicios transitorios celebrados entre la trabajadora y la EST, y que se regula a partir del artículo 183-R del código del trabajo, razonando la recurrente que ninguna disposición del código del trabajo, ni el artículo 183-O en que se funda el fallo, relativo a la duración de los contratos de puesta a disposición de trabajadores, establece que dos o más de estos no pueden exceder de 90 días.

En cuanto al segundo tipo de contrato, regulado en el artículo 183-R y siguientes del código del trabajo, señala que no tiene un plazo máximo de duración establecido en la ley, y que, erradamente, el sentenciador les aplica las restricciones temporales del artículo 183-O del Código del Trabajo, previstas para los contratos de puesta a disposición de trabajadores.



Señala que tampoco resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 183-T del Código del Trabajo para fundamentar la multa, ya que ni el informe de fiscalización ni el fallo tienen por establecido que la trabajadora haya continuado prestando servicios después del 30 de junio de 2019, por lo que no se puede considerar que se transformó en uno de plazo indefinido, pasando la usuaria a ser su empleador.

En cuanto a la transgresión del artículo 183-AE del Código del Trabajo, indica que, conforme al inciso primero de la disposición citada, de acuerdo a los hechos establecidos en el fallo, en particular que el plazo de su último contrato era hasta el 30 de junio de 2019, el fuero maternal del que habría estado gozando la trabajadora cesó de pleno derecho al terminar de prestar servicios para la usuaria, es decir, el 30 de junio de 2019, no siendo necesario que su empleador Trayectoria EST haya solicitado el desafuero previo al fin del vínculo laboral, como señala la sentenciadora en el considerando sexto del fallo.

En cuanto a la transgresión al artículo 183-U del Código del Trabajo, indica que los contratos de trabajo celebrados entre la trabajadora Renata flores Valdivia y Trayectoria EST S.A. se suscribieron bajo “la hipótesis del artículo 183-Ñ b) del Código del Trabajo, esto hasta el 30 de septiembre de de 2018, comenzando a ser el fundamento de los nuevos contratos la letra e) del referido artículo”, por lo tanto los supuestos son los contemplados en la ley laboral, no existiendo tampoco hecho infraccional al respecto consignado en el “informe de fiscalización” en el que se funda el fallo.

Argumenta que de haberse aplicado correctamente las normas invocadas la Juez debió acoger el reclamo, dejando sin efecto la multa, porque la fiscalizadora comete un error al establecer el hecho infraccional, aplicando la norma del artículo 183-O referente a la duración del contrato de puesta a disposición a los contratos de trabajo entre Renata Flores Valdivia y Trayectoria EST S.A.

**Quinto:** Que como se estableció en el motivo segundo de esta sentencia, la causal de infracción de ley debe respetar el sustrato fáctico de la sentencia recurrida, pues los hechos establecidos por el tribunal son inamovibles en esta sede jurisdiccional.

Así, en el considerando tercero del fallo impugnado, la juez de base enumera, en la parte documental, tanto de la reclamante como de la reclamada, los contratos de puesta a disposición de trabajadores, suscritos entre Trayectoria EST S.A. y la empresa reclamante, Distribuidora Puig Chile Ltda., usuaria de los trabajos transitorios, así como los contratos de trabajo de servicios transitorios de la trabajadora Renata Flores con Trayectoria EST S.A.

Pues bien, de sendos grupos de contratos es dable observar que la trabajadora Renata Flores se desempeñó en trabajos transitorios para la usuaria Distribuidora Puig Ltda., desde el 1° de octubre de 2017 al 30



de junio de 2019, plazo que excede el límite de los 90 días que indica el artículo 183-O del Código del Trabajo.

El artículo 183-T del mismo cuerpo normativo indica que si el trabajador continúa prestando servicios después de expirado el plazo de su contrato de trabajo, este se transformará en uno de plazo indefinido, pasando a ser la usuaria su empleadora. A su vez, el artículo 183-U indica que aquellos contratos que tengan por objeto encubrir una relación de trabajo permanente con la usuaria se entenderá que se han hecho con fraude a la ley y la usuaria será considerada como empleadora de la trabajadora puesta a su disposición.

En consecuencia, encontrándose demostrado con los documentos antes referidos que la trabajadora Renata Flores suscribió sucesivos contratos de servicios transitorios entre el 1° de octubre de 2017 al 30 de junio de 2019, ambas fecha inclusive, a disposición de la usuaria Distribuidora Puig Chile Ltda. quien estaba embarazada en el momento de su desvinculación, como lo acreditan certificados médicos agregados por la reclamada, las disposiciones legales invocadas por la recurrente han sido bien aplicadas, ya que la juez de base se ha limitado a interpretar armónicamente las normas antes citadas, en particular el artículo 183-O del Código del Ramo, en cuanto fija un plazo máximo de 90 días del contrato de trabajo de puesta a disposición de trabajadores, disposición que concuerda con los artículos 183-T y 183-U del mismo cuerpo legal, ya que estos últimos –si bien se encuentran ubicados en las normas del contrato de trabajo de servicios transitorios- están en directa relación con el artículo 183-O, en lo que se refiere a encubrir una relación laboral permanente entre la usuaria y la trabajadora y a respetar los plazos máximos de servicios transitorios.

Por último, la cita del artículo 183-AE del Código del Trabajo es incompleta, ya que la regla pertinente para decidir esta controversia es el inciso 2° de esta disposición y no el inciso 1° que refiere la reclamante, toda vez que la trabajadora, en concepto del órgano fiscalizador, al haberse excedido los contratos de puesta a disposición y los contratos de servicios transitorios de los márgenes temporales, incurrieron en la consecuencia legal que contemplan los artículos 183-N, 183-T y 183-U, esto es considerar a doña Renata Flores como una trabajadora dependiente de la usuaria Distribuidora Puig Chile Ltda., debiendo respetar esta última empresa el fuero maternal que amparaba a la trabajadora hasta su término, conforme a las normas generales.

En consecuencia, al no existir infracción de ley en las normas denunciadas, las que han sido aplicadas correctamente por la juez del grado, esta causal subsidiaria debe ser desestimada.

**Sexto:** Que, en subsidio, invoca la causal del artículo 478, letra e), en relación al artículo 459 N°4, ambas del Código del Trabajo, por omitir el fallo el análisis de toda la prueba rendida.



Explica que el fallo se limita a enumerar los medios de prueba incorporados al proceso, sin efectuar un análisis de fondo de los mismos, abocándose la recurrente a señalar cada medio de prueba rendido, especialmente el testimonio de Alejandra Severino y Andrés Fuentes, así como documentos de la causa T-1537-2019, llevada ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, aportados como prueba nueva, la Resolución de Multa N° 8599/19/50, de 23 agosto 2019, el formulario F I-20 “fiscalización separación ilegal de trabajador con fuero” N° 13-07-2019-2399, los contratos de trabajo entre Renata Flores Valdivia de empresa Trayectoria EST S.A., las Liquidaciones de remuneraciones de Renata Flores de empresa Trayectoria EST SA., los contratos de puesta a disposición de trabajadores entre Distribuidora Puig Chile Ltda. y Trayectoria EST SA., la Copia carpeta de fiscalización 13-07-19-2399 de fecha 20 de agosto de 2019, los certificados de embarazo; procediendo a efectuar la recurrente un análisis de los mismos, en lo que estima ajustado a derecho, concluyendo que de haber sido estos ponderados elementos de prueba habrían llevado a la sentenciadora a la conclusión de la inexistencia del hecho infraccional por el que se le cursó la multa.

Adicionalmente, señala que no basta para resolver el conflicto los hechos establecidos en el fallo, especialmente en cuanto a la determinación de la existencia de una relación laboral entre la trabajadora Renata Flores Valdivia y la reclamante en esta causa, reiterando los argumentos de la causal previa sobre la incorrecta aplicación del artículo 183–O del Código del Trabajo, y, adicionalmente, indica que el fallo nada indica sobre el resto de los puntos que se fijaron como controvertidos, tales como la separación y el supuesto despido por parte de Distribuidora Puig Chile Ltda., no señalando nada la sentencia ni respecto de los antecedentes y documentación que le fue exhibida e informada en la fiscalización, ni de la forma o términos en que se llevó a cabo el proceso de fiscalización que dio origen a la multa reclamada, concluyendo que de haberse analizado toda la prueba rendida, y el razonamiento que condujo a los hechos probados, se habría resuelto acoger el reclamo, por no existir el hecho infraccional, por haberse dado íntegro cumplimiento a la normas del Código del Trabajo sobre las empresas de servicios transitorios, del contrato de puesta a disposición de trabajadores y del contrato de trabajo de servicios transitorios, y no estar acreditado el despido o separación por parte de Distribuidora Puig Chile Ltda.

Pide, respecto de estas causales, que se acoja el recurso, anulando la sentencia, dictando fallo de reemplazo que declare que se acoge el reclamo de multa dejando sin efecto la resolución de multa N° 8599/19/50-1 de 23 de agosto de 2019 reclamada y consecuentemente la multa impuesta por 210 UTM.

**Séptimo:** Que la causal invocada –en la hipótesis propuesta– requiere, para ser acogida, los siguientes requisitos: **a)** que el recurrente



singularice cuáles fueron los medios de prueba omitidos; **b)** que el sentenciador efectivamente haya omitido el análisis de determinados medios de prueba en su sentencia, y **c)** que esa omisión influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Pues bien, como puede observarse, si bien es cierto el recurso enumera las probanzas que, en su concepto, fueron omitidas en el análisis probatorio que hace la juez del grado, dicha aseveración no es del todo efectiva, pues en el motivo quinto del fallo, la magistrada alude directamente a los contratos de trabajo de servicios transitorios y el informe de exposición, documento este último que refiere otros contratos no agregados por la reclamante.

En cuanto al resto de la prueba que indica el recurrente, cabe consignar que el motivo octavo del fallo sí se hace cargo de ella, concluyendo que en nada altera lo resuelto en forma precedente, aseveración que constituye valoración indirecta de la prueba, congruente con el análisis sostenido en el motivo quinto del mismo fallo.

Respecto de lo antecedentes de la causa RIT T-1537-2019 caratulada “Flores con Distribuidora Puig Chile S.A.” del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, incorporada como prueba nueva, si bien no hay mención expresa de esos antecedentes en la sentencia impugnada, es claro que la transacción suscrita entre la reclamante y la trabajadora Renata Flores fue suscrita con posterioridad a la fiscalización que dio origen a este reclamo, ya que lo primero ocurrió con fecha 13 de febrero de 2020 y lo segundo con fecha 22 de agosto de 2019, habiéndose dictado la Resolución de Multa al día siguiente, de modo tal que dichos antecedentes no alteran lo resuelto en la sentencia recurrida, pues a la fecha de la fiscalización la infracción al artículo 201 del Código del Trabajo sí existía.

En tal virtud, aun cuando no haya habido una mención expresa de la prueba testimonial y de los restantes documentos, aquello no influye en lo dispositivo del fallo, por lo que esta causal también debe ser desestima.

Ergo, al no prosperar ninguna de las causales invocadas, el recurso de la reclamante será rechazado.

Por las razones anteriores, y con lo dispuesto, además, en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo se **rechaza** el recurso de nulidad deducido por la reclamante Distribuidora Puig Chile Ltda., en contra de la sentencia de siete de diciembre del año dos mil veinte, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la causa RIT I-430-2019, la que, en consecuencia, no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

**Laboral-Cobranza N° 2.811-2020.**



Pronunciada por la Duodécima Sala, presidida por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo, e integrada además, por el Ministro (S) señor Alejandro Aguilar Brevis y el Abogado Integrante señor David Peralta Anabalón, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, trece de octubre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.







Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Tomas Gray G. y Ministro Suplente Alejandro Aguilar B. Santiago, trece de octubre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a trece de octubre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

